

Resumen

La impactante muerte de James Byrd por arrastre en un camino de Jasper en 1998 atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales al tema de la justicia racial en Texas. Un año más tarde, líderes de derechos civiles y activistas de justicia racial quedaron atónitos cuando una supuesta operación de control antidrogas en el pequeño pueblo de Tulia llevó al arresto de 41 residentes Afro-Americanos – el diez por ciento de la población Negra del pueblo y la mitad de los hombres Negros adultos en Tulia. Todos los arrestos y condenas se basaron en los alegatos de un agente de narcóticos encubierto “sin espionaje electrónico, sin vigilancia, y virtualmente sin testigos secundarios.”¹ No se presentó nunca ninguna evidencia de armas, dinero o incluso drogas. Mientras que las comunidades de color criticaban el ataque racista descarado en contra de los residentes del pueblo, el Procurador General del estado nombró al agente de la ley, Tom Coleman, Agente Destacado del Año. Estos incidentes, en combinación con otros actos de abuso policiaco, crearon el contexto para una respuesta legislativa a los perfiles raciales en Texas.

La Política Pública

Aprobada en el 2001, la ley de Perfiles raciales de Texas (SB 1704) es una ley estatal que:

- Prohíbe específicamente los perfiles raciales por parte de oficiales de policía.
- Ordena que cada agencia de aplicación de la ley en el estado “adopte una política escrita detallada en cuanto a perfiles raciales;” y
- Requiere de las agencias de aplicación de la ley que recolecten la información de paradas de tráfico y un proceso por el cual los ciudadanos puedan presentar quejas acerca de ser atacados mediante perfiles raciales.

Impacto

Desde la perspectiva de los partidarios de la ley, la recolección obligatoria de la información no intentaba ser una solución a los perfiles raciales en Texas, sino más bien un primer paso en una pelea más larga. La legislación intentaba proporcionar una herramienta fuerte, basada en información, que las organizaciones de derechos civiles podrían usar para abogar efectivamente por respuestas específicas de política pública a los perfiles raciales.

¹ Jennifer Gronneman, “Tulia Blues,” (El Blues de Tulia) *Village Voice*, Agosto 1, 2001

Desde la aprobación de la ley, las organizaciones de derechos civiles han continuado trabajando en la implementación de la nueva ley. La Coalición para la Reforma de la Justicia Criminal en Texas (TCJRC por sus siglas en Inglés) – un proyecto de Pro-Tex, una red estatal de organizaciones progresistas – ha jugado un papel de liderazgo en el monitoreo de la implementación de la ley.

TCJRC solicitó los conjuntos de datos del primer año aplicación de la ley de más de 1000 agencias a través del estado. Aunque sólo una tercera parte proporcionaron la información necesaria, la coalición pudo usar los datos que reunió para producir en Febrero del 2004 un reporte que documentó el tratamiento dispar de Latinos y Negros por parte de los oficiales de Policía y atrajo atención significativa de medios de comunicación estatales y nacionales.

Con el análisis de la información en la mano, grupos de base y de derechos civiles organizaron una serie de doce reuniones comunitarias a través del estado para educar a los residentes locales acerca de sus derechos bajo el nuevo estatuto de perfiles raciales. Estos eventos solidificaron el trabajo colaborativo entre organizaciones comunitarias Afro Americanas y Latinas, y los residentes que asistieron a las reuniones comunitarias aumentaron la base de apoyo para futuras campañas de justicia racial.

Actores Claves

La ACLU de Texas tomó la iniciativa en el esfuerzo para ganar una ley de perfiles raciales en Texas. Reconociendo que el éxito de la ley dependería de la movilización local de las comunidades de color, la ACLU formó una coalición con el NAACP, la Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos (LULAC por sus siglas en Inglés), el Concilio Nacional de la Raza y el Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus siglas en Inglés). El Senador estatal Royce West, un liberal Afro Americano de Dallas, fue el autor de la ley. La TCJRC jugó un papel clave en la creación y el mantenimiento de una infraestructura que conectara a miembros interesados de la comunidad con el esfuerzo de presión en el capitolio.

Ganando la Política Pública

Una vez que el Senador West introdujo la ley, la coalición de organizaciones montó una campaña basada en la educación y movilización local. Además del testimonio del liderazgo de las organizaciones, varios cientos de ciudadanos viajaron de alrededor del estado a Austin para un día de presión legislativa.

En una acción que Hill Harrel, director de ACLU, considera clave para el éxito de la ley, el Senador West llamó a una reunión de las organizaciones de derechos civiles respaldando la ley y los que esperaban se opusieran: el Departamento de Seguridad Pública, la policía estatal, los representantes del sindicato de policía, los ejecutivos de la policía de la ciudad, y los sheriffs de los pequeños pueblos. Harrel relata que “El Senador les enseñó la ley, les dijo que alguna ley de perfiles raciales iba a pasar y que esta era su oportunidad de negociar sus términos.”² En el esfuerzo para neutralizar la

² Entrevista telefónica a Will Harrel, Junio 2, 2004

oposición, se sostuvieron reuniones adicionales. Una vez que los grupos de derechos civiles y las agencias de aplicación de la ley acordaron una versión negociada de la legislación, ésta pasó a través de la legislatura muy rápidamente.

Después de la aprobación de la ley por una legislatura conservadora, el Comité de Calendarios era el responsable de programar la ley para que fuera considerada por el Gobernador. Fue en esta etapa que los miembros conservadores del comité comenzaron a “marcar” anónimamente la ley cada semana impidiendo que el comité la programara. Después de meses de incansables testimonios, escritura de cartas y presiones, Harrel del ACLU y los líderes del NAACP y LULAC confrontaron al presidente del Comité de Calendarios en su oficina del capitolio y mantuvieron un sentón improvisado, rehusándose a salir hasta que la ley fuera enviada al Gobernador. En Junio del 2001, el Gobernador Republicano Rick Perry firmó como ley el estatuto más fuerte de la nación hasta la fecha, en contra de los perfiles raciales. En parte, Harrel le atribuye el éxito de la ley en una legislatura conservadora con un gobernador conservador a los intentos de los Republicanos para cortejar el voto Latino.

Retos

Uno de los acuerdos que se alcanzaron antes de la aprobación de la ley fue el de dividir la recolección de la información en escalones. El Escalón Uno ordenaba que cada departamento de policía debería reunir y reportar la información de gente a quienes se les extendieran citatorios y que fueran registrados. Este requerimiento entraría en vigor el primer año de la legislación. Los datos del Escalón Dos es la información sobre la raza de los individuos involucrados en cualquier “acción iniciada por parte de oficiales de aplicación de la ley,” incluyendo aquellos que fueron parados por la policía pero no se les dieron infracciones, que es la situación que en donde los grupos de derechos civiles afirmaban que los perfiles raciales eran más obvios. La recolección de la información del Escalón Dos entraría en vigor después de dos años. Sin embargo, la información del Escalón Dos no tenía que ser recolectada si la agencia de aplicación de la ley tenía una cámara de video en cada carro de policía o incluso si ha *solicitado los fondos* para las cámaras.

Además, como la ley no crea un mecanismo centralizado estatal para reunir la información, las organizaciones de justicia racial tienen que solicitar la información de cada una de las más de 1,000 agencias individuales de aplicación de la ley en el estado.

Replicabilidad

La ley de perfiles raciales de Texas fue un triunfo clave en un estado conservador de “ley-y-orden” y fue aprobada y firmada el primer año que fue introducida. Mientras que este extraordinario logro puede no ser fácilmente obtenido en otras situaciones, algunos de los elementos más importantes pueden reunirse en otros lugares: una campaña comunitaria de base amplia, involucramiento estratégico con los oponentes; y seguimiento consistente para hacer uso de este tipo de legislación para promover la justicia racial.

Además, abogar por una recolección de información más fuerte puede también ser re aplicado en los esfuerzos para rastrear tendencias de expulsiones en las escuelas. Más aún, mientras que los asuntos de perfiles raciales han tomado un significado mayor en el contexto post 9-11, los grupos de derechos de los inmigrantes podrían abogar por una recolección de información acerca de la raza y etnicidad de los individuos que enfrentan medidas punitivas por parte de las agencias de migración para demostrar el ataque sistemático de ciertos grupos inmigrantes.